

10 de 1874.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por el C. Cristobal Montiel, en representacion del C. Mariano del Conde, contra el comisionado de hacienda del Gobierno del Estado, por cobro de contribuciones, multas y recargos relativos á unos terrenos de agostadero.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Matamoros, Julio 22 de 1874.—*Vistos:* el escrito en que el C. Lic. Cristobal Montiel, como apoderado del C. Mariano del Conde, vecino de México, promovió el presente juicio de amparo, porque para hacer efectivo el pago de contribuciones que ejecutivamente se le exigen de ciento cincuenta sitios de agostadero, que en la municipalidad de Reynosa tiene su poderdante, el comisionado de hacienda del Estado, usando de la facultad económico-coactiva, le embargó terrenos, rentas y dinero, con lo que reputa violadas algunas de las garantías que la Constitución de la República le otorga: el otro sí, en donde pide que se suspenda el acto reclamado; el proveído de conformidad; el informe de la autoridad inmediata ejecutora, con sus justificantes respectivos; lo expuesto por el C. Promotor fiscal, evacuando el traslado que se le corrió; el auto que mandó abrir el negocio á prueba; las rendidas dentro del término; el alegato del Ministerio público y no el de la parte actora, por que exhibido fuera del periodo oportuno, no se le admitió; y todo lo demas que debió tenerse presente y ver convino.

Considerando: que el quejoso señala seis violaciones constitucionales, haciendo consistir la primera, en que la agencia fiscal

TOMO VI.—PARTE II.

para exigirle las contribuciones relativas á los cuatro años de 1870, 1871, 1872 y 1873, segun liquidacion de fojas 29, se apoya en una ley posterior de 23 de Junio de 1873, del Congreso del Estado, que no se puede aplicar sin darle efecto retroactivo.

Que aquellas contribuciones se arreglaron, la del año de 1870, á la ley de 28 de Noviembre de 1868; la de 1871, á la de 27 de Agosto de 1870; la de 1872, á la de 25 de Noviembre de 1871 y la de 1873, á la de 13 de Noviembre de 1872; cuyas leyes, la primera en su art. 35; la segunda, en el 25, 26 y 27; la tercera, en el 35, 36 y 37; y la cuarta, en el 30, 31 y 32, contienen franquicias en favor de los deudores; pero con especialidad las tres últimas, pues previnieron que los morosos sean demandados por los agentes fiscales, ante el Juez que corresponda, por la contribucion y multas; que este Juez los oiga y que los oiga en forma; que califique las causas que expongan, y que segun fueren ó no justas, los condene á solo el pago de la contribucion, ó al de ésta y los recargos.

Que la citada ley de 23 de Junio, declara en su art. 1º, que "la facultad económico-coactiva para exigir el cobro de los rezagos de las contribuciones pendientes reside directamente en el Gobierno, sus comisionados, agentes fiscales y alcaldes de los pueblos," de modo que vuelve sobre lo pasado, que lo cambia sustancialmente, con notorio perjuicio de los deudores que eran objeto de las precedentes disposiciones, quitándoles derechos favorables por ellas concedidos, y estableciendo un nuevo Tribunal para juzgarlos, con lo que se ataca en todas sus partes el art. 14 del Código de 1857, que dice: "no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley."

Que la segunda violacion se funda, en la incompetencia del comisionado de hacienda,

para embargar y rematar bienes, con objeto de hacer efectivo el pago de contribuciones, multas y recargos, y de facto, aunque aquel empleado derive sus facultades de la misma ley de 13 de Junio que ya se mencionó, resultando que lo que ella establece en resumen, es un tribunal especial para el pago de esos adeudos, no puede sostenerse, por ser contra el tenor del precepto constitucional, que bajo el art. 13 quiere, que *"en la República Mexicana, nadie pueda ser juzgado por tribunales especiales."*

Que la tercera violacion se basa, en que la liquidacion contiene cantidades procedentes de penas sancionadas contra el deudor moroso y al ocultador, deduciendo de ello y con razon, que al exigir el comisionado de hacienda su importe, tambien ataca esta garantia: *"La aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial,"* consignada en el art. 21 del Código fundamental.

Que en apoyo de la cuarta violacion, se alega lo excesivo de las multas de la liquidacion de la ageneia fiscal, para deducir que no pueden imponerse, sino conculcando el art. 22 de nuestra Carta, que abolió para siempre ciertas penas, y entre ellas la multa excesiva, allí expresamente enumerada.

Que en tela de juicio solo se aceptan los hechos bien probados, y el que se analiza no lo está, primero, porque su calificacion no es absoluta sino relativa; y dependiendo de comparar el monto de la pena con el del capital, no conociéndose como no se conoce realmente en el caso este segundo extremo, tampoco se puede hacer aquella con acierto; segundo: porque de las incidentales referencias que sobre el particular se hallan en autos, parece ser de gran cuantía dicho caudal, puesto que del testimonio de la escritura, que el mismo C. del Conde exhibió, y corre á fojas 6, resulta: que solo en el Estado, en terrenos, posee 450 sitios de ganado mayor; y tercero: por que si esas multas arrojan la crecida suma de seis mil

seiscientos cuarenta y ocho pesos treinta y cinco centavos, hay que advertir, como juiciosamente lo nota el C. Promotor, que proceden de diversos años y de varias aplicaciones, motivos todos, que cuando menos, hacen dudosísima la infraccion del precepto constitucional, cuya garantia se invoca.

Que funda la quinta violacion, en que las leyes relativas á los años de 71, 72, 73 y aun la de 74, contienen calificacion y graduaciones de contribuciones tan desproporcionadas é inequívocas, que mientras que el dueño de un sitio de ganado mayor paga al mes un peso solamente, el dueño de mas de treinta sitios, paga por cada uno, diez pesos al mes, lo que en concepto del actor se opone á lo prescrito en la fraccion II del artículo 31 de la Constitucion, que declara, ser obligacion de todo mexicano, *contribuir para los gastos públicos..... de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.*

Que á esto repone la autoridad ejecutora, que con aquella progresion que las del Estado señalan, y tanto censura el quejoso, se trata de facilitar el fraccionamiento de la propiedad territorial, cuya aglomeracion obsta al cultivo, y enerva el desarrollo de la riqueza pública; intento sano, fin político, que si es susceptible de favorecerse por medios mas suaves que el adoptado en esas leyes, no por eso se percibe de un modo claro que estén en pugna con el artículo constitucional citado.

Que alega por último el actor, que desde el 17 de Febrero de 71, quedó en México otorgada la escritura, cuyo testimonio presentó, y se haya á fojas 6 y 7.

Que por su tenor se ve, como desde entonces hizo la division hereditaria de los 450 sitios de que se compone su hacienda del Saulto, clausulando formas de los terrenos, seis fracciones iguales, tomándose para ellos una sexta parte de los sitios que en cada municipalidad existen, y de cuyas fracciones se reservó 61, una parte para sí,

consignando las otras cinco, para la Señora su esposa y sus cuatro hijos.

Que á lo precedente añada, que segun dicha escritura, debe cobrarse en Reynosa la contribucion, considerando los 150 sitios que á ella pertenecen, como de seis contribuyentes con 25 sitios cada uno, y no como de uno solo los 150 sitios, lo cual no se efectúa.

Que entre uno y otro modo de liquidar, la diferencia es tan notable, que observándose la escritura, la cuota es de quinientos setenta y siete pesos cincuenta centavos al año, mientras que despreciándola, monta hasta mil quinientos, que es el triple, y lo que se le exige.

Que se insiste en este cobro, cumplimentando una resolucion de 1º de Febrero de 1873, dada por el Gobierno del Estado, de acuerdo con su consejo, en la que se declaró nula é insubsistente aquella escritura, de lo que el actor deduce la sesta violacion.

Que cualesquiera que sean las reflexiones á que el tenor de la pretendida escritura se preste, para suponer que se fraguó con el exclusivo y único intento de eludir las leyes de contribuciones; es inconcuso que no es al Congreso ni tampoco al Gobierno del Estado á quien compete declarar la nulidad é insubsistencia del documento, porque esto conduciría á confundir los poderes, que separar quizo el artículo 50 de la Constitución estableciendo, que: *Nunca podrán reunirse dos ó mas poderes en una persona ó corporacion.*

Se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Mariano del Conde, contra el cobro de contribuciones que ejecutivamente le hace el comisionado de Hacienda del Estado, usando de la facultad económico-coactiva, en materia contenciosa y por multas y recargos de los terrenos que posee en la municipalidad de Reynosa, embargándole bienes para rematárselos, con violacion de las garantías concedidas al promovente, en los artículos 57, 13, 21 y 50 del Código de 5 de Febrero de 57.

Notifíquese esta sentencia; publíquese y elévese con el expediente original en revision.

Así definitivamente juzgando y sentenciando, lo decretó el C. Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas y lo firmó ante mí. Doy fé.—*Manuel Mendiola.*—*Felipe N. Garza y Garza*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 2 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por el C. Cristobal Montiel en representacion del C. Mariano del Conde, contra el comisionado de Hacienda del Gobierno del Estado, por cobro de contribuciones, multas y recargos relativos á unos terrenos de agostadero, reputando el quejoso vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 16, y 31 fraccion 2ª, 14 y 21, la parte del 22 que prohíbe la multa excesiva, y 50 de la Constitución general.

Considerando: que en el expediente aparece, que el comisionado de Hacienda del Estado de Tamaulipas, por la via económico-coactiva, ha embargado bienes á del Conde para rematarlos, no obstante que el cobro debe hacerse por la via contenciosa, aplicando leyes posteriores á la época en que las contribuciones se causaron, y atacando ademas las garantías consignadas en los artículos 13 y 21 de la Constitución general; y que así mismo ha vulnerándose la á que se refiere el artículo 50 de la propia Constitución, con el hecho de haber declarado el Consejo y Gobierno del Estado, nula la escritura de division de los terrenos y anticipo de herencia de ellos, otorgada por el C. Mariano del Conde, en virtud de cuya declaracion el comisionado de Hacienda ha procedido al cobro de las contribuciones, recargos y multas relativas.

Por lo expuesto, de conformidad con lo

que dispone el artículo 101 de la Constitución general, y por sus propios legales fundamentos, se declara: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio por el Juez de Distrito de Tamaulipas á 22 de Julio último, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Mariano del Conde, contra el cobro de contribuciones que ejecutivamente le hace el comisionado de Hacienda del Estado, usando de la facultad económico coactiva en materia contenciosa, y por multas y recargos de los terrenos que el quejoso posee en la municipalidad de Reynosa, embargándole bienes para rematárselos, con violacion de las garantías á que se refieren los artículos 13, 14, 21 y 50 del Código de 5 de Febrero de 1857.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Setiembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Sonora, contra los Sres. Lukken y Castro, por suplantacion en calidad de cuatrocientas cajas de velas importadas en el Pailebot americano "Lolita" el 2 de Noviembre de 1873.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Mayo 7 de 1874.—Visto el presente juicio de contrabando promovido por el Administrador de esta Aduana marítima, por suplantacion en calidad de cuatrocientas cajas de velas, pesando en bruto siete mil cuatrocientas libras inglesas, que hacen tres mil trescientas cincuenta y ocho doce centavos kilógramos, importadas de San Francisco en el Pailebot americano "Lolita" el 2 de Noviembre de 1873 á la consignacion de los Sres. Lukken y Castro de este comercio. Visto lo alegado y probado por las partes; lo pedido por el C. Promotor fiscal y cuanto mas de autos consta y ver covino; y

Considerando: que las velas en cuestion, presentadas como de sebo por los importadores, se calificaron como estearinas por el vista y por el administrador de la misma aduana, fundado este en que es práctica constante en las aduanas marítimas de la República, considerarlas con tal carácter, mientras no se demuestre lo contrario, por medio de un análisis científico.

Que hecho este por los Sres Pablo Rubio, D. Florencio Monteverde y D. Juan A. Robinson hijo, peritos nombrados al efecto, los dos últimos declararon que las velas de que se trata son de sebo.

Que con los asuntos litigiosos que se ven sobre algun objeto científico, debe estar-se á lo que informen y declaren los peritos. F. M. tomo 3º P. 213 núm. 46. Y finalmente, que dos testigos contestes y conformes hacen plena prueba, fallo: Prime-